

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Demandante	MARGARITA MARIA MALDONADO como curadora de CAROLINA POSADA MALDONADO
Demandado	AFP PORVENIR S.A y BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A
Tipo de proceso	Ejecutivo
Radicado Nacional	05-001-31-05-0010-2022-00104-01
Instancia	Segunda
Providencia	Interlocutorio 82 de 2022
Tema y subtema	Mandamiento de pago conforme a la sentencia judicial base de ejecución
Decisión	Revoca

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, entra a resolver el recurso de apelación contra el auto del 27 de julio de 2022, proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por **Margarita María Maldonado**, como **curadora de Carolina Posada Maldonado**, en contra de la **AFP Porvenir S.A y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A**, radicado número 05001 3105 **010 2022 00104** 01.

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia se tiene que el 27 de julio del año en curso el juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

"PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por vía Ejecutiva Laboral, a favor de **CAROLINA POSADA CARDONA**, quien actúa por medio de Curadora de **MARGARITA MARIA MALDONADO CARDONA**, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 32.478.782, por **SESENTA MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$60.093.959)** dejadas de pagar entre el 05 de agosto de 2009 y el 14 de febrero de 2022 y las que se sigan causando.

SEGUNDO: Por la **INDEXACIÓN** del retroactivo pensional reconocido entre el 05 de agosto de 2009 y el 14 de febrero de 2022, por la suma de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$19.216.285)** y la que se siga generando.

TERCERO: Por las costas del proceso ordinario, en la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS DICISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.817.052)**.

CUARTO: Por los intereses moratorios del Artículo 1617 del Código Civil, en la suma de **DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$17.324)**, entre el 14 de julio de 2021 y el 10 de septiembre de 2021.

QUINTO: COSTAS del proceso ejecutivo, las cuales se resolverán en la etapa procesal pertinente."

Luego de la notificación, el apoderado judicial de **BBVA Seguros de Vida S.A.** interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación manifestando:

"Inicialmente y para el caso en concreto el título que se ejecuta a través del mandamiento de pago es la sentencia.

En ese orden de ideas, (i) la sentencia emitida no impuso condena de reconocer la pensión a cargo de BBVA y no es impuesta con toda razón, en tanto esta entidad no fue contraparte de la ejecutante, (ii) ya que entre ellos no se trabó una relación jurídico procesal y por esta razón es imposible e inviable que adquiriera la calidad de acreedora frente al BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., pues entre ellos se insiste (iii) no existió ninguna relación y en esa medida si no existió ninguna pretensión frente a mi mandante, ningún derecho podrá abrogarse u otorgársele ahora.

*De manera que estos argumentos serían más que suficientes para negar el mandamiento de pago en contra de mi mandante, pues de hacerlo, como en efecto ocurrió, se vulnera **el principio de la congruencia entre el título que se ejecuta (la sentencia) y el mandamiento de pago.***

Adicionalmente, debe resaltarse que mi representada es una aseguradora privada, que dentro de su objeto social no se encuentra el reconocimiento de pensiones, sino que se atiene al cumplimiento de un contrato de seguro con la entidad demandada, por lo que se hace necesario insistir que frente a ella no existió pretensión de ningún tipo.

Seguidamente agregó que la obligación de su representada es CONTRACTUAL para con el fondo, y no LEGAL, motivo suficiente para que cualquier prestación que pudiere llegar a florecer del contrato, lo sería entre quienes fueron partes del mismo; tan es así que entre la actora y su mandante no existió ningún vínculo procesal.

Precisó que al atenderse a lo decidido en el proceso declarativo con radicado 2013 – 1126, dentro del mismo se determinó una obligación de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en favor de las menores Camila Posada Martínez y Carolina Posada Cardona **,a cargo de la AFP PORVENIR S.A.,** en tanto ésta última fue la demandada directa y la contradictora de la actora y no así su representada, pues ésta únicamente actuó en calidad de llamada en garantía por la AFP Porvenir S.A., en virtud de una póliza previsional de invalidez y muerte.

Enfatizó en que no hay una obligación expresa, clara y exigible de su mandante con la ejecutante.

A la par resaltó que el mandamiento de pago incurre en errores, ya que en el numeral primero el mismo se torna indeterminado frente al deudor de la obligación, se limita a establecer las obligaciones prestacionales sobre un total, sin indicar sobre quien recaen, lo que genera confusión frente a la entidad llamada a responder, pues lo hace indiscriminadamente.

La misma situación ocurre con los numerales segundo y tercero del auto de apremio, ya que se incurre en el error de librarlo al parecer frente a todos los intervinientes, desconociendo que en relación con cada uno existen fuentes y obligaciones distintas.

Reitera, que su representada suscribió contrato de seguro previsional con la demandada AFP PORVENIR, por lo que en ese sentido la obligación está vinculada a la relación jurídico procesal frente a esta AFP, pero de ninguna

manera para con la ejecutante. La única obligación de su representada tal como quedó expuesto en la sentencia es al pago a la AFP PORVENIR de la suma adicional necesaria para sufragar la pensión, lo anterior conforme a la cobertura de la misma.

En cuanto a los intereses contenidos en el artículo 1617 del Código Civil establecidos en el numeral cuarto, no son procedentes en tanto en materia laboral no se encuentran consagrados, y no se estipularon en la sentencia de primera instancia.

En virtud de lo anterior solicitó reponer la decisión o en su defecto conceder el recurso de alzada.

Mediante proveído del 18 de octubre, el A quo desató adversamente el recurso horizontal, argumentando:

"Con respecto al recurso de reposición contra el mandamiento de pago, tal como fue indicado en la parte considerativa de este, se afianza este juzgador en las razones que tuvo para incluirlo en la orden de apremio, esto es que a minuto 21 del audio de la sentencia de primera instancia (archivo 2), el Juez de instancia indicó que esta entidad es la garante del pago de la prestación a cargo de Porvenir S.A. y así quedó consignado en la parte considerativa de la sentencia y en el Numeral Quinto de la parte resolutive, por lo que no se repondrá el mandamiento de pago."

Al estimar debidamente sustentada la apelación, se concedió y procedió al envío del expediente a esta Corporación.

Del traslado para alegar hizo uso el apoderado apelante quien reiteró los argumentos sustentados en su recurso de apelación, reiterando que frente a su representada BBVA Seguros de vida no se trabó una obligación a favor de la parte ejecutante Margarita María Maldonado, tornándose improcedente el cumplimiento de la condena que pretende hacer valer en este sentido.

En orden a decidir basten las siguientes,

Consideraciones

En atención a la inconformidad de la recurrente, se analizará si los documentos base de ejecución satisfacen las exigencias de ley para determinar si hay o no título que preste mérito ejecutivo en favor de la señora Maldonado respecto de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

La doctrina¹ ha definido el título ejecutivo como todo aquel documento que proviene del deudor o de su causante, en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en favor del acreedor o del tenedor legítimo, o una providencia judicial o arbitral en firme de igual contenido.

El título ejecutivo debe demostrar la existencia de una prestación en beneficio de una persona. Es decir, **que el obligado debe observar, en favor de su acreedor, una conducta de hacer, de dar o de no hacer y esa obligación debe ser expresa, clara y exigible, requisitos estos que ha de reunir cualquier título ejecutivo, no importa su origen.**

El artículo 100 del C. P. T. y de la S.S. a la letra dispone: *será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme.* Precepto que debe concordarse con el artículo 422 del C. G. P., en el que se indica: *Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones **expresas, claras y exigibles** que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial.*

¹ LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, *Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano*, Dupré Editores, Tomo II, 7ª ed., Bogotá, 1999, págs. 388.

Frente a lo anterior, explica la Corte Constitucional²:

"...que los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales.

Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación "(i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme." Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos.

*Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es **clara** la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, **en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan.** Es **expresa** cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es **exigible** si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada..."*

Así las cosas, se tiene que la hoy ejecutante en su momento presentó acción ordinaria con radicado 2013-001126 contra la AFP Porvenir S.A., pretendiendo pensión de sobreviviente, fondo privado que en escrito separado a la contestación de la demanda (Carpeta 03 expediente ordinario, fl. 55-59), **llamó en garantía a la aseguradora BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.**, argumentando en síntesis que por mandato del sistema de seguridad social integral contrató con esta póliza colectiva de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes No. 0110005, en los conceptos de pensión de sobreviviente y auxilio funerario, en el capital necesario para financiar estos riesgos. Llamamiento que fue admitido durante el trámite.

² Sentencia T-747 de 2013.

Frente a la figura del llamamiento es preciso citar las siguientes precisiones, contenidas en sentencia T-309-2022, que para el caso son relevantes:

"La figura procesal del llamamiento en garantía: definición, elementos y reglas que la rigen

49. *El llamamiento en garantía fue definido en el Código General del Proceso como la herramienta procesal que le permite a "quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación".*

50. *Esta figura procesal se fundamenta "en la existencia de un derecho legal o contractual, **que vincula a llamante y llamado** y permite traer a este como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia"³. Se trata de una relación de carácter sustancial **que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita, y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.***

51. *El profesor Hernando Morales Molina (1991) indica que la figura referida tiene por objeto "que el tercero llamado en garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a rembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de la obligación legal de saneamiento"⁴.*

52. *La jurisprudencia constitucional ha delimitado que el sujeto llamado en garantía puede ejercer los siguientes actos procesales: i) adicionar la demanda si es llamado por el demandante; ii) contestar la demanda si es llamado por el demandado; iii) proponer excepciones previas, mixtas o de mérito; y iv) negar o no aceptar el llamamiento. Asimismo, ha fijado como atributos del llamado en garantía que este **"no es parte, sino un tercero, que como se dijo, tiene una relación sustancial con una de las partes, el llamante. Relación de la que se deriva la obligación de que el garante responda por quien lo ha llamado"**⁵.*

De acuerdo con ello, como acertadamente lo expone el recurrente, en ningún momento se trabó una relación jurídico procesal entre la hoy ejecutante y BBVA Seguros de Vida, pues la póliza previsional se suscribió entre esta aseguradora y la AFP sin que, a esta última entidad, la hoy ejecutante le

³ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de julio de 2010 con radicado 15001-23-31-000-2007-00546-01(38259).

⁴ Morales Molina, H. (1991). *Curso de derecho procesal civil*. Bogotá: Editorial ABC. Pág. 258.

⁵ ⁵ Sentencia C-170 de 2014.

pueda reclamar la obligación de reconocimiento de pensión, como deudora, pues como se vio, es un tercero, no parte y que únicamente tiene una relación sustancial con su llamante, frente a la cual exclusivamente tiene obligaciones.

Y es que nótese como en la sentencia base de la ejecución, queda clara la obligación de Porvenir S.A de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en favor de las menores Camila Posada Martínez y Carolina Posada Cardona, al ser esta administradora la demandada directa dentro del proceso, no así el tercero vinculado con ocasión del llamamiento en garantía, con ocasión de un claro convenio, tal como se indicó en la parte motiva:

*"Debe el despacho también atender la situación jurídica de la entidad llamada en garantía a este proceso, indicar que debe **activarse la póliza previsional tomada en su momento para efectos de financiar la suma que hiciere falta para financiar la prestación de sobrevivientes...**, deberá interpretar lógicamente interpretar este operador judicial que esta suma de dinero corresponde a la financiación de la pensión más no a la mora de las mesadas y de acuerdo con el ámbito de cobertura pues de dicha póliza, lo demás deberá ser cubierto por la AFP con recursos de su propio patrimonio de su propio presupuesto..." (min 3:25:45 y s.s)*

Lo que posteriormente se reitera en la parte resolutive, imponiéndose claramente a Porvenir S.A. la obligación de pagar la pensión, en los siguientes términos: (min 3:30 y ss)

"TERCERO: CONDENAR a la AFP Porvenir S.A. al pago a favor de las menores Carolina Posada Cardona y Camila Posada Martínez representadas legalmente por María Margarita Maldonado Cardona y Sorelly Marcela Martínez Berrio, respectivamente, de la pensión de sobrevivientes causado por el fallecimiento del señor Mario Andrés Posada Maldonado en su condición de hijas del referido causante en el 50% de su importe para cada una hasta la fecha en que arriben a la edad de 18 años o hasta los 25 años de edad si acreditan condición de estudiantes ...a título de retroactivo pensional adeuda la entidad demandada a cada una de las beneficiarias de la prestación aquí reconocida la suma de \$42.921.848.00 de conformidad con los razonamientos expresados en la parte motiva de esta providencia, suma sobre la cual deberá efectuar la entidad demandad los correspondientes descuentos...

CUARTO: CONDENAR a la AFP porvenir a reconocer intereses moratorios sobre el importe de las mesadas que integran el retroactivo aquí reconocido de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, luego de efectuar los descuentos por aportes para el riesgo de salud...

QUINTO: Deberá concurrir la SOCIEDAD BBVA Seguros de Vida **en calidad de llamado en garantía** para la financiación de la prestación aquí reconocida, en cuanto corresponda a la cobertura de la póliza previsional tomada para tales efectos por lo expresado en la parte motiva.”

Surgiendo con nitidez que la obligación pretendida según el título ejecutivo está a cargo únicamente de la AFP Porvenir S.A., al ser la deudora del derecho concedido por la sentencia judicial, a favor de la hoy apelante, y es que no podría ser de otra manera, pues como ya se ilustró **las únicas obligaciones que surgen a cargo de la llamada son en favor de la tomadora de la póliza, en este caso la AFP**, siendo ésta última quien en realidad estaría facultada para accionar algún cumplimiento por parte de la aseguradora, con fundamento en la póliza previsional, lo que en el caso no ocurre, pues nótese además que la aseguradora ya emitió a favor de la AFP, que es su acreedora, el pago de la suma adicional, tal como se aprecia en el documento allegado:

Correo: Despacho 16 Sala Laboral

02Segundainstancia - OneDrive

Correo: Liliana Maria Ramos Ech

08 EXCEPCIONES FRENTE AL MANDAM

D:\Escritorio\EJECUTIVOS\20PENDIENTES\10-2022-00104\08%20EXCEPCIONES%20FRENTE%20AL%20MANDAMIENTO%20DE%20PAGO%2005%20001%2031%2005%20010%2020...

Mis Reportes

08 EXCEPCIONES FRENTE AL MANDAMIENTO DE PAGO 05 001 31 05 010 2022 001...

9 / 9

110%

BBVA

Seguros

NIT: 8002408820

REIMPRESION

ORDEN DE PAGO: 2001212747
COMPAÑIA: BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

NIT(c.e.): 8002248088

VR. A GIRAR: \$ 243.744.198

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

SUCURSAL: HORIZONTE

F.Factura: F.Emisión(pago): 17-09-2021

Factura: F.Previsia Pago: 17-09-2021

Régimen Tributario: Gran contribuyente autoretenedor con o sin ánimo lucro NO USAR

Forma de Pago: Transferencia

Cuenta: 256083478

Tipo Cta: Corriente

Banco: 0023 - BANCO DE OCCIDENTE

Descripción del pago: Pago Caso Suma Adicional 15355640 MARIO ANDRES POSADA MALDONADO - Suc. Giradora: HORIZONTE

Contrato: Invalidez y Sobreviv

Tipo de Concepto: INVALIDEZ INDEMNIZACIONES

Moneda: Pesos

DETALLE DEL PAGO

SUCURSAL (Póliza): HORIZONTE

PÓLIZA: 121

CERTIFICADO: 7849

NIT(c.e.): 8002248088

TOMADOR: FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS RAMO: Invalidez y Sobreviv

Escribe aquí para buscar

5:48 p. m.

1/12/2022

Correo: Despacho 16 Sala Labor

02Segundainstancia - OneDrive

Correo: Liliana Maria Ramos Ech

08 EXCEPCIONES FRENTE AL MA

08 EXCEPCIONES FRENTE AL MANDAMIENTO DE PAGO 05 001 31 05 010 2022 001...

9 / 9

110%

08 EXCEPCIONES FRENTE AL MANDAMIENTO DE PAGO 05 001 31 05 010 2022 001...

DETALLE DEL PAGO

SUCURSAL (Póliza):

NIT(c.c.): 8002248088

NIT(c.c.): 15355640

SINIESTRO: 1290507121745

AMPARO AFECTADO: Muerte

HORIZONTE

TOMADOR: FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS(RAMO: Invalidez y Sobreviv

ASEGURADO:MARIO ANDRES POSADA MALDONAD

F.SINIESTRO: 13 08 2006

PÓLIZA: 121

CERTIFICADO: 7849

VR. FACTURA: 243.744.198

VR. SERVICIOS:

DSCTO. PTO. PGO.:

VR. IVA:

VR. REPUESTOS:

DSCTO. SALVA:

DEDUCIBLE:

DSCTO FINANCIERO:

DSCTO. PRIMA:

CIA

CUENTA CUIF

NOMBRE CUENTA

DÉBITO

CRÉDITO

2

25520001

STROS X PAGAR DE a-PLUS

243.744.198

243.744.198

2

512115

SEGUROS PREVISIONALES

243.744.198

243.744.198

TOTALES

243.744.198

243.744.198

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

JOHAN SEBASTIAN SANCHEZ BARRETO

MONICA ANDREA RODRIGUEZ

F.Impresión: 29 08 2022

Escribe aquí para buscar

S:48 p.m. 1/12/2022

En ese orden de ideas, no se avizora una obligación clara, expresa y exigible de BBVA Seguros de Vida, en favor de la ejecutante, luego no hay lugar a librar orden de apremio contra dicha sociedad.

Se plantea igualmente en la apelación la imposibilidad de emitir mandamiento de pago por los intereses plasmados en el artículo 1617 del C.C., frente a lo cual, vale anotar que si bien, en anteriores decisiones esta Sala acogió la tesis de la procedencia de estos atendiendo a lo dispuesto en la sentencia del 26 de junio de 2012, con radicado 41846 emitida por el órgano de cierre de esta jurisdicción, tesis reorientada por la misma Corporación para considerar que la normatividad laboral contiene disposiciones propias respecto a los intereses, así se ha establecido el reconocimiento de **los comerciales, ello en los artículos 23 de la Ley 100 de 1993 (referente al pago tardío de las cotizaciones al sistema), el artículo 141 de la misma ley 100 de 1993 (no pago de mesadas pensionales), el artículo 65 del C.S.T (no pago de salarios y prestaciones sociales) o el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (no pago de cesantías),** siendo tales preceptos precisos al indicar los casos que gobiernan, sin que quede abierto a interpretaciones su posible extensión a eventos diferentes a los allí regulados, como lo pretendido en esta oportunidad, al pedirse aplicar el artículo 1.617 del C.C a acreencias de

carácter laboral, debiendo entonces **esta Sala acatar el precedente vertical reiterado en más de 3 decisiones que constituyen doctrina probable**, pues el superior funcional y a la vez órgano de cierre en la especialidad, en la sentencias **SL 3449 de 2016**, replicando lo dicho en la providencia **SL, del 21 nov. 2001. rad. 16476** señaló lo siguiente:

*"Planteado así el asunto, desde ya se advierte que le asiste razón al recurrente cuando afirma que los intereses legales previstos en el art. 1617 del C.C. **NO SON PROCEDENTES FRENTE A ACREENCIAS DE ÍNDOLE LABORAL**, pues los mismos operan para créditos de carácter civil, tal y como lo sostuvo esta Sala de la Corte en sentencia **CSJ SL, 21 nov. 2001. rad. 16476**, cuando al referirse a la norma en comento sostuvo:*

***De tal manera que la disposición transcrita consagra un régimen resarcitorio específico que gobierna las consecuencias del incumplimiento de obligaciones pecuniarias civiles de estirpe contractual**, consistentes en el pago de sumas de dinero determinadas, conforme al cual acreditado en juicio el retardo del deudor, proceden ipso jure, a menos que las partes hayan estipulado un interés superior, como mínimo, a título indemnizatorio los referidos intereses moratorios, avaluados por el propio legislador quien los presume de derecho y cuantifica. Lo anterior comprende, como atrás se dijo, el lucro cesante, esto es, la ganancia o provecho que deja de reportarse. Pero como es menester contemplar las consecuencias de una economía inflacionaria, pues de lo contrario se llegaría al establecimiento de tasas negativas, debe agregarse la respectiva corrección monetaria (se resalta).*

***De otra parte, importante es precisar que la legislación del trabajo ningún vacío presenta en cuanto a los intereses aplicables a deudas de carácter laboral, y, en esa medida, no hay lugar a la aplicación analógica de normas propias del Código Civil.** De ahí, que una condena a intereses por la mora en el cubrimiento de créditos laborales, con fundamento en el artículo 1617 de dicho estatuto se exhibe equivocada, por cuanto se reitera, tal texto legal no es el llamado a gobernar el asunto. Por tal razón y, en este aspecto, el cargo es fundado". (resalto de la sala).*

Siendo reiterado además el mismo criterio en sentencia **SL 4849-2019** en la cual se indicó:

*«No se accederá a esta pretensión pues esta Corte tiene definido que «[...] **los intereses legales previstos en el art. 1617 del C.C. no son procedentes frente a acreencias de índole laboral**, pues los mismos operan para créditos de carácter civil» (CSJ SL, rad. 16476, 21 nov. 2001, reiterada en decisión CSJ SL3449-2016).»*

Reproduciéndose lo ya mencionado en sentencia **SL3001-2020**:

*«Por último, **no se accederá al pago de los intereses moratorios, en la medida que la orden de restablecimiento del contrato solo apareja el pago de las acreencias laborales dejadas de percibir por los trabajadores, como si el vínculo nunca hubiese terminado, y para efecto de corregir la pérdida de poder adquisitivo, solo es procedente la indexación de las sumas adeudadas.**»*

Luego, ante el nuevo estudio del tema por esta colegiatura, se acoge el precedente vertical de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, según el cual en la legislación del trabajo y la seguridad social no se presenta ningún vacío en cuanto a los intereses aplicables a las deudas de esta naturaleza, razón por la cual no es dable acudir a disposiciones que se encuentren en estatutos diferentes, por lo que, se torna improcedente la posibilidad de aplicar intereses legales frente a acreencias de índole de seguridad social como se solicita, con fundamento en el artículo 1617 del C.C, o cualquier otro tipo de intereses distintos a los estipulados en el título base de la ejecución, debiendo revocar este punto.

No sobra precisar **que ciertamente en la parte resolutive del mandamiento no se individualizan los ejecutados**, pero en sus motivaciones sí se alude como accionados tanto a la AFP como a la hoy recurrente, lo que a todas luces, como ya se explicó es improcedente, en esa medida, habrá de revocarse el mandamiento proferido el 27 de julio del año en curso, para en su lugar ordenar al Juzgado de conocimiento que nuevamente libre orden de apremio en contra de la AFP Porvenir S.A., verificando las obligaciones **a su cargo pendientes de cumplimiento**, considerando para ello el contenido completo del título ejecutivo.

Sin costas al haber prosperado el recurso interpuesto.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, **revoca** el auto del 27 de julio de 2022, proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de

Medellín, dentro del proceso ejecutivo promovido por la **MARGARITA MARIA MALDONADO CARDONA**, en calidad de curadora de CAROLINA POSADA CARDONA en contra de **AFP PORVENIR S.A. y BBVA SEGUROS DE VIDA S.A.**, para en su lugar, ordenar al juzgado de conocimiento que nuevamente libre orden de apremio en contra de la AFP Porvenir S.A., verificando las obligaciones **a su cargo pendientes de cumplimiento**, y teniendo en cuenta el contenido completo de la sentencia base de ejecución.

Sin costas al haber prosperado el recurso interpuesto.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, en virtud de lo dispuesto en artículo 295 C.G. del P, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

Los magistrados, (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados No. 227 del 16 de diciembre de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>